

Un Pacto por la Vida: Hacia la Habitabilidad Sostenible de los Cerros Orientales de Bogotá

Co-aprendizaje para la acción: Fomentando la justicia ambiental en Bogotá

Authors: Yun Nam Chan | Harry Coles | Max Drabwell McIlwaine | Mayra Pacheco Méndez | Ben Richmond

Mensajes Clave

- Los marcos legales destinados a proteger la Reserva Forestal en los Cerros Orientales de Bogotá están siendo explotados por actores privados y estatales, dejando a los residentes en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
- La inversión estatal en los barrios de los cerros hasta ahora ha sido limitada tanto en cantidad como en dirección, por una parte debido a las designaciones de riesgo en la zona.
- El intercambio de información ha generado malentendidos que han afectado directamente los procesos de toma de decisiones. Esto es multiescalar – sucede entre y dentro de los barrios, y en las interacciones con el estado.
- Las interacciones entre riesgos sociales y físicos, condiciones de vida y problemas de inversión han formado un ciclo de retroalimentación que continúa empeorando la calidad de vida en los barrios.
- Se necesita adoptar un enfoque de ‘Pacto por la Vida’ que requiera compromisos tanto del estado como de las comunidades para permitir la habitabilidad sostenible de los cerros.

Introducción

Los barrios de Triángulo Alto (TA), Triángulo Bajo (TB) y Manantial (M), ubicados en los cerros orientales de Bogotá, han sido designados por el gobierno con varios niveles de “riesgo”, desde alto/inmitigable (TA) hasta bajo (TB).

La razón detrás de esto es la amenaza real y percibida de peligros naturales, como deslizamientos de tierra, para los residentes de estas comunidades. Sin embargo, estas designaciones de alto riesgo no cuentan toda la historia. Interesados como la Caja de la Vivienda Popular (el departamento de vivienda del gobierno) y desarrolladores privados como CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción), llevan a cabo la provisión gubernamental para el reasentamiento de las comunidades, utilizando la designación de riesgo como justificación. Se ha creado un ciclo de retroalimentación negativa donde las designaciones de alto riesgo generan problemas circulares que resultan en el empeoramiento de las condiciones.

Basándonos en nuestra investigación en los cerros orientales, se observaron factores tanto internos como externos, con posibles soluciones a los problemas que también requieren iniciativas tanto internas como externas. Se analizarán los desafíos en torno a la inversión y el intercambio de información colectiva y la toma de decisiones. Nuestra metodología consistió, primero, en una caminata de transecto por los barrios de TA, TB y Manantial, entrevistas con residentes donde construimos cronogramas personales y cronogramas de eventos para los barrios, y un grupo focal/taller con un grupo de 20 residentes.

Usando nuestros hallazgos, se propone adoptar y adaptar la estrategia del ‘Pacto de Vida (Pact for Life)’ (Mesa, 2006), que es un plan de acción que requiere colaboración y compromiso tanto de las comunidades como del estado para permitir la habitabilidad sostenible de los cerros orientales. Al formular este informe, destacamos los problemas clave para una audiencia más amplia, que va desde otras comunidades en las colinas orientales hasta los responsables de políticas en Bogotá. Este documento de recomendaciones de política pública va dirigido, entre otros actores, a la Mesa de Cerros Orientales, una plataforma para la interacción de organismos estatales relevantes y movimientos socioambientales y colectivos de base que abogan por la acción colectiva en las fronteras urbano-rurales en los cerros orientales de Bogotá.



Imagen 01

Imágenes de: arriba a la izquierda - tubería de agua en mantenimiento (Alto); arriba a la derecha - muro de contención roto (Manantial); abajo a la izquierda - muro de contención incompleto (Manantial); abajo a la derecha - tanque de agua con fugas (Alto).

Definiendo el Ecobarrio

Ecobarrio: El término Ecobarrio se refiere a una de las alternativas al desarrollo (tales como las Ecoaldeas y las iniciativas de transición) adoptada por los residentes de los barrios, particularmente en Manantial. Estas iniciativas desafían, entre otras cosas, la concepción típica de cómo debería ser una ciudad y, en su lugar, se centra en la armonía con la naturaleza. En el contexto de Bogotá, la propuesta del Ecobarrio fue presentada inicialmente por el gobierno distrital durante la alcaldía de Antanas Mockus; pero en los barrios de TA, TB y Manantial, la idea fue reivindicada como una estrategia de resistencia al desplazamiento gubernamental basado en el riesgo (Ome, 2017).

1. Comprender la precariedad en los Cerros Orientales

La situación en TA, TB y Manantial refleja la situación en gran parte de los Cerros Orientales, donde la inseguridad de la tenencia de la tierra ha dejado en disputa el derecho de los residentes a habitar los cerros (Vieda Martínez, 2021).

La inseguridad general que acompaña a esta manera de habitar esta zona de la ciudad a menudo conduce a una disminución de la calidad de vida debido a la negativa del gobierno a reconocer e invertir en estos asentamientos.

Los conflictos causados por la tenencia disputada y sus consecuencias en los barrios que forman Triángulo se ven agravados por las designaciones de riesgo impuestas por el gobierno. Las designaciones de riesgo "no mitigable" en partes del área han restringido aún más el derecho a habitar los cerros, amenazando con desplazar a quienes ocupan dichas áreas aparentemente "no mitigables" (Allen et al., 2015). El proceso de designación de riesgo del gobierno está moldeado por la agenda de reasentamiento de los residentes. Esto implica una falta y mala dirección de la inversión.

1.1. Problemas con la inversión

La inversión opera a través de dos categorías distintas: 'mala inversión' o 'inversión desacertada' (donde se dirige la inversión a veces por motivaciones políticas) y 'desinversión' (falta de inversión en general). Existen formas e instituciones distintas detrás de estas categorías, cada una con su propia agenda y criterios que influyen en la naturaleza del riesgo dentro y alrededor de los barrios.

1.1.1. Desinversión

La desinversión representa la disminución del gasto en el mantenimiento de la infraestructura y los servicios existentes. La desinversión opera en dos sentidos. Actúa para aumentar directamente el riesgo físico, como se vio en 2008 en los Cerros Orientales cuando un tanque de agua con fugas propiedad del gobierno en TA causó un deslizamiento de tierra y el posterior desalojo de 4 viviendas. Por esta razón, un líder comunitario nos dijo que "el riesgo es inducido" por la inacción del estado. La única respuesta, además del desalojo, fue que el organismo gubernamental reemplazó la tapa del tanque con fugas, en lugar de abordar el problema de raíz. Limpiaron el área que representaba más riesgo y crearon una fachada de mantenimiento.



Imagen 02
Manantial.

Estos actos pueden verse como una forma de ‘coerción suave’. La disminución de la calidad de los servicios, como una tubería de agua incapaz de manejar la presión requerida para la inclinación de las colinas (Figura 1: Arriba a la izquierda), muros de contención parcialmente completados (Figura 1: Abajo a la izquierda) y defensas incapaces de soportar las lluvias (Figura 1: Arriba a la derecha). La infraestructura poco confiable e insegura aumenta la probabilidad de reasentamiento. Esto es un acto de desplazamiento a través de la desinversión.

1.1.2. Mala inversión o inversión desacertada

La mala inversión o inversión desacertada puede entenderse como la asignación incorrecta de recursos por parte de los organismos gubernamentales, priorizando agendas como la protección de la reserva forestal o las cuotas nacionales para combatir el cambio climático sobre los derechos de quienes viven en los barrios. Basándonos en nuestra investigación con residentes locales, entendemos que la asignación de estos recursos se serviría mejor invirtiendo en la comunidad. Uno de los ejemplos más claros de esto aparece en el esquema de reasentamiento de la Caja de Vivienda. La designación de altos niveles de riesgo hace que los residentes sean elegibles para el reasentamiento. El esquema proporciona viviendas subsidiadas por el gobierno, pago por el reasentamiento y un subsidio de alquiler de entre 600,000 y 700,000 COP (\$145-\$170) al mes mientras esperan la vivienda. Con un tiempo de espera promedio para la vivienda de 5.5 años (Sarmiento, 2022), solo en subsidios de alquiler el gobierno puede esperar

pagar 35 millones de COP (\$8400) por hogar reasentado, sin contar el pago por el terreno y los subsidios para la construcción de viviendas. Para comparar, un líder comunitario estimó que una inversión equivalente a 10 millones de COP (\$2400) por hogar aseguraría el suministro seguro de agua y ayudaría a prevenir riesgos.

A pesar de las claras tendencias de desinversión en la mejora de los barrios, el Estado ha dedicado recursos significativos a objetivos y proyectos específicos. Un gran proyecto de gestión de riesgos de 4 mil millones de COP (\$1 millón) se completó en Corinto después de que los residentes fueron desalojados por la fuerza. Esto significa que la inversión se gastó en proteger la reserva forestal despejada en lugar de las áreas habitadas. De manera similar, los programas de gestión de incendios en curso son completados por contratistas externos que cortan plantas invasoras e inflamables. Sin embargo, los residentes nos dijeron que los contratistas cortan las plantas, ayudando inadvertidamente a su proliferación al “esparcir semillas”. En cambio, los residentes querían técnicas de gestión alternativas utilizando plantas nativas y técnicas de corte adecuadas.

La comunidad ya ha demostrado cómo pueden manejar mejor el riesgo con recursos limitados. Por ejemplo, terminando el muro de contención incompleto (Figura 1, abajo a la izquierda) y adaptándolo para convertirlo en un jardín multifuncional. De manera similar, la Figura 3 muestra canales cavados para dirigir las aguas residuales lejos de las casas y carreteras.

La reasignación de estos recursos hacia la mejora y el mantenimiento de la infraestructura mediante el uso de trabajadores locales y sus propios métodos puede mejorar la resiliencia tanto de la comunidad como del medio ambiente, al mismo tiempo que reduce el riesgo.

1.1.3. Implicaciones del Reasentamiento

La presión para reasentarse está aumentando rápidamente, con las tasas actuales de disminución de la población (Figura 2). Manantial y TA estarán deshabitados dentro de los próximos 6 años. Estas dos áreas también tienen la designación de riesgo más alta: no mitigable en Manantial y alta en TA. Las presiones del riesgo y la desinversión que esto conlleva contribuyen a estas tasas de disminución. Se prevé que la población de Triángulo Bajo se estabilice, ya que tiene algún nivel de formalización.

La disminución de la población representaría una pérdida del papel fundamental que el Ecobarrio actualmente tiene. Esto expondría el área a las presiones de desarrollo cercanas planteadas por las universidades y el grupo CAMACOL, que han adquirido terrenos dentro de la zona de amortiguamiento (Figura 1: abajo a la izquierda; también Figura 4). La posición de los barrios junto a la zona de amortiguamiento actualmente actúa para detener el movimiento de la zona: moverla proporcionaría legitimidad a su reclamación de la tierra y amenazaría la existencia del Ecobarrio. Si los hogares en Triángulo Alto y Manantial fueran completamente reubicados, la zona de amortiguamiento probablemente se desplazaría, permitiendo el desarrollo del área para servir a los intereses inmobiliarios, socavando así los objetivos de protección ambiental y social mientras se reproduce la vulnerabilidad en otros lugares” (Few et al., 2021). Como prueba de esto, un líder comunitario informó cómo los desarrolladores compraron un área de terreno para construir viviendas sociales, en el proceso talando 20,000 árboles y causando un deslizamiento de tierra significativo.

Esta contradicción entre desarrollo y riesgo está en el corazón del caso en los cerros orientales. La designación de riesgo proviene de su construcción socioeconómica. Esta construcción de riesgo asume que un estatus socioeconómico más bajo indica una menor capacidad para lidiar con peligros físicos, lo que resulta en una designación de riesgo más alta (Ley 1523 de 2012). A través de la designación de riesgo,



Imagen 03

Ilustración del ciclo de retroalimentación en los barrios TA, TB y Manantial

estas suposiciones sobre la capacidad se vuelven ‘técnicas’ (Li, 2007) a pesar de suposiciones altamente contingentes, que, como investigaciones anteriores (Allen et al., 2015) han indicado, albergan decisiones arbitrarias con elementos contradictorios (Fraser, 2017).

Cuando esto se considera junto con la desinversión por parte del estado dentro de la comunidad, se hace evidente un ciclo continuamente reproducido de negligencia activa y un aumento en el riesgo.

1.2. Falta de intercambio colectivo de información y toma de decisiones

“El conocimiento es poder” es un sentimiento y una frase que fue expresada por varios miembros de la comunidad durante un taller. Reconocieron que para que las comunidades puedan negociar colectivamente con el estado para mejorar el vecindario, el conocimiento y la acción deben convertirse en colectivos. Para entender los problemas con los flujos de información en los vecindarios, sugirieron que es importante adoptar un enfoque multi-escalar que considere los niveles intra-comunitario, inter-comunitario y extra-comunitario.

Uno de los problemas más claros con el flujo de información proviene de una desconexión entre el estado y las comunidades. Surgió de nuestra investigación que el gobierno “deliberadamente retiene” información sobre la comunidad; solo a través del acceso a la Mesa de Cerros Orientales la comunidad puede acceder a información sobre la legislación que existe para desplazarlos, dejando así a los residentes en la oscuridad. Cuando la información llega al área, hay más desafíos sobre cómo se comparte dentro de las comunidades.

También hay problemas con los flujos de información interbarrio e intrabario. Los residentes dejaron claro que algunos vecindarios reciben más información que otros, y dentro de los vecindarios, los líderes comunitarios no siempre pueden llegar a todos los residentes. Por lo cual, se requieren más espacios colectivos para compartir y discutir información, ya que según los habitantes existen pocos eventos o reuniones comunitarias que les permitan entender y hablar sobre los problemas comunitarios.

Un ejemplo de estos tres niveles de flujo de información ineficiente se relaciona con el programa estatal de reasentamiento que ha dejado a los residentes con poca idea de cómo funciona el proceso o

qué significa para ellos. Según nuestra discusión en el grupo focal, el estado también ha hecho poco para explicar el proceso a las comunidades a las que están ofreciendo reasentamiento. Esto significa que las personas deben comprometerse a ciegas con un proceso sobre el cual tienen un conocimiento limitado si quieren irse. La falta de información clara en las comunidades y la incertidumbre que esto genera permite que se desarrollen rumores que aumentan la confusión que sienten los residentes. Estos tres niveles de flujo de información necesitan canalizarse de manera más efectiva, lo que a su vez permitirá una mayor participación y procesos de toma de decisiones más representativos entre las comunidades. Esto aumentará probablemente el poder de negociación colectiva del territorio en las interacciones con el estado, lo cual será crucial para una solución sostenible a los desafíos de riesgo.

1.3. Problemas con los marcos legales

Comenzando con la ratificación de la Reserva Forestal en el año 2000 (Decreto 619) (Colombia. Departamento Administrativo de Planeación Distrital, POT, 2000), el gobierno ha mostrado intención de priorizar la sostenibilidad ecológica de los Cerros Orientales, incluso si esto significa el desplazamiento de quienes los habitan. Desde entonces, la frontera de la Reserva Forestal y la zona de amortiguación urbano-rural ha amenazado

Pacto por la Vida: 4 Pasos



Imagen 04

Ilustración del plan de acción de cuatro pasos.

con moverse más hacia los cerros y más cerca de los barrios. Este movimiento de la frontera viene con una presión creciente por parte de actores externos, ya que hay una demanda creciente de “vivienda social” y los desarrolladores de propiedad privada que influyen en el proceso de toma de decisiones del estado sobre la zona de amortiguación ejercen tal presión en la creencia de que esta tierra puede volverse económicamente valiosa.

Los efectos de este desplazamiento de la frontera tienen el potencial de ser dañinos para los residentes de los barrios, particularmente en Triángulo Alto, que es el más cercano a la frontera actual y donde las personas viven en las condiciones más precarias. Según nuestras entrevistas allí, el primer efecto se manifiesta a través de las restricciones que impone a la movilidad de los residentes. Si la zona de amortiguación se desplaza más arriba del cerro, cubrirá el camino principal fuera del barrio que los residentes de Triángulo Alto usan para acceder al resto de la ciudad. Esto significará que los propietarios privados poseerán el camino y los residentes ya no podrán usarlo. Esto agregará una gran cantidad de tiempo al ya largo viaje de los niños a la escuela y a las personas que intentan ir al trabajo, infringiendo directamente el derecho de los residentes a la ciudad. El desplazamiento de la frontera también contrarrestará el objetivo del estado de mantener los cerros como una reserva ecológicamente sostenible. Cuando la frontera se desplaza, la tierra es comprada por propietarios privados y empresas constructoras que desarrollarán edificios que no son ecológicamente sostenibles.

Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno asegurarse de que esto no suceda.

Otros problemas surgen de lo que Ome (2017) describe como un ‘Frankenstein Legal’, donde la legislación que cambia y se actualiza constantemente respecto al riesgo y el derecho a habitar los cerros ha dejado una gran cantidad de incertidumbre en los barrios. Los asentamientos quedan en un ‘limbo judicial’ en el cual su legalidad y estado de riesgo son poco claros, lo que deja el área estancada y sin inversión, además de dejar lagunas en la ley para la explotación por parte de actores privados.

1.4. Ciclo Vicioso

Un bucle de retroalimentación es un proceso en el cual las salidas de un sistema se retroalimentan y se usan como entradas, creando un circuito (Carver, 1982). Esto puede generar consecuencias negativas y hacer difícil romper tal ciclo. En San Cristóbal (que comprende nuestros tres asentamientos de estudio), como se ilustra en la Figura 5, se ha desarrollado un bucle de retroalimentación durante varias décadas que ha llevado a una empeoramiento de la situación para los residentes en los esfuerzos contra la designación de riesgo no mitigable y el consecuente desplazamiento.

A medida que las comunidades son consideradas de alto riesgo, la calidad y escala de las inversiones se reducen, lo que lleva a un mayor riesgo para los residentes. Las condiciones empeoran debido al mayor riesgo, lo que lleva a una escalada en la designación de riesgo, lo que a su vez lleva a una mayor falta de inversión en la comunidad. Un ejemplo de esto sería la falta de inversión en barreras para proteger contra deslizamientos de tierra. En este ejemplo, esta mayor designación de riesgo significa que las barreras se consideran una pérdida de tiempo, lo que lleva a peores condiciones, un factor de riesgo percibido y real más alto, y, por lo tanto, a una designación de “mayor riesgo”, lo que a su vez conduce a una mayor falta de inversión en defensas contra deslizamientos.

2. Intervenciones Estratégicas

Basándonos en nuestra investigación en los Cerros Orientales, nuestras recomendaciones son co-desarrolladas con miembros de la comunidad local y resumidas en nuestra versión adaptada de la propuesta del Pacto por la Vida de la Mesa de Cerros. Creemos que esto tiene el potencial de asegurar un enfoque ambientalmente justo para abordar los riesgos que enfrentan las comunidades en los Cerros Orientales, proporcionándoles formas de vida más sostenibles y asegurando su derecho a la ciudad.

2.1. Objetivo

La intervención estatal es esencial para romper este ciclo. El “Pacto por la Vida” promueve esfuerzos y compromisos mutuos de todas las partes para lograr el derecho a la ciudad y la custodia del bosque (ver también la Plataforma Arraigo para esfuerzos similares de trabajo colaborativo en Bogotá - López Meneses et al., 2022). La Mesa propuso enfoques similares con la Secretaría Distrital de Ambiente en 2006, pero según nuestra investigación actualizada, esto no se llevó a cabo.

Estratégicamente, proponemos un enfoque de intra a extra. Al reconstruir el mecanismo de toma de decisiones intra-barrios, pueden desarrollar capacidad y multiplicar el modelo de Ecobarrio a lo largo de los Cerros Orientales. La alianza más fuerte entre los barrios de los Cerros Orientales puede entonces negociar un pacto de compromiso mutuo con el estado. Este reconocimiento por parte del estado y otros actores puede convertirse en apoyo financiero concreto para mejorar las condiciones generales de vida. Por lo tanto, sugerimos una estrategia gradual de cuatro pasos para lograr una mayor justicia ambiental en los Cerros Orientales (ver Figura 6). El actor principal en el primer paso es la comunidad. El segundo paso debe ser coordinado por la Mesa de Cerros. El tercer paso es coordinado tanto por el estado como por los barrios, y el paso final es principalmente llevado a cabo por el estado.

2.1.1. Potenciando la capacidad local para la acción colectiva

Los participantes del taller enfatizaron la importancia de consolidar los barrios para trabajar juntos en abordar los desafíos socioeconómicos, la desconfianza intra-barrio y las amenazas de desalojo. “Queremos fusionar los barrios y ser parte de la solución”, dijo un participante. Proponemos reconstruir el mecanismo de toma de decisiones intra-barrio para asegurar una representación abierta e igualitaria de los diferentes vecindarios. Esto implicaría, por ejemplo, consejos y comités regulares, como juntas de acción comunal (JACs) que realicen talleres sobre gestión sostenible del riesgo. Es crucial que el flujo de información dentro del barrio sea transparente y se comparta libremente entre todos los miembros, en lugar de centralizarse. Esto se puede lograr a través de prensa comunitaria, tabloneros de anuncios comunitarios o grupos de WhatsApp comunitarios (Maya-Jariyego, 2019). Estos talleres, comités y canales de comunicación deben ser atendidos y estar compuestos por miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres, así como por personas de todas las edades y grupos raciales y aquellos con diversos antecedentes de desplazamiento para asegurar que la comunidad esté justamente representada.

2.1.2. Recolección de Datos a través de Censos y Mapas

Datos precisos y completos sobre el barrio son esenciales para desarrollar una estrategia colectiva, iniciar un pacto de crecimiento cero con el estado e incentivar a la comunidad. Realizar un censo exhaustivo y un mapeo participativo ayudará a identificar zonas de riesgo, proyectos de inversión fallidos del estado e información demográfica y de hogares básica, como en el caso de la comunidad de favelas de Maré en Río de Janeiro (Ansarri, 2022).

2.1.3. Establecimiento de una Estrategia Colectiva

Basándose en los datos recopilados a través del censo y mapeo, el barrio debe desarrollar una estrategia colectiva que defina objetivos, acciones y plazos. Esta estrategia debe reflejar las prioridades de la comunidad y estar diseñada para involucrar activamente a todos los miembros.

2.2. Paso 2: Multiplicar Iniciativas de Ecobarrio

2.2.1. Intercambio de Visitas entre Ecobarrios y Promoción del Ecobarrio como Solución

Los funcionarios de la Mesa de Cerros deben involucrarse con los líderes del proyecto actual de Ecobarrio en Manantial para comprender los éxitos y desafíos y evaluar la viabilidad del Ecobarrio como una solución para romper el ciclo de retroalimentación en otros barrios de los Cerros Orientales. Entre comunidades, la Mesa puede crear foros para que representantes de varios Ecobarrios discutan desafíos comunes, establezcan fuertes redes de comunicación e inicien proyectos conjuntos, un centro de intercambio de información, programas de capacitación y talleres sobre prácticas sostenibles, abiertos a todos los miembros de las comunidades sin importar su género, etnia, edad o antecedentes de desplazamiento.

Externamente, la Mesa de Cerros debería formar alianzas con partes interesadas como el sector académico para apoyar iniciativas comunitarias, como el establecimiento de un jardín medicinal (potencialmente en colaboración con el Jardín Botánico), desarrollar estrategias para influir en las políticas que afectan a la comunidad y promover huertos comunitarios para la producción y seguridad alimentaria (Maassen, 2017).

2.2.2. Establecer Actividades Inter-Barriales

Organizar actividades inter-barriales puede ayudar a fomentar la colaboración en los Cerros Orientales. Esta iniciativa unirá a diferentes barrios, promoviendo la unidad y una competencia saludable, al mismo tiempo que alienta a los jóvenes a participar en los asuntos comunitarios. Los participantes sugirieron establecer una liga de fútbol. Aunque la actividad pueda parecer inicialmente dominada por hombres, puede servir como un punto de partida para fomentar más actividades inclusivas y priorizar actividades inter-barrios lideradas por mujeres, como en el caso del Ecobarrio Villa el Salvador, Perú, que promovió la cohesión social a través de actividades deportivas (Dammert, 2012).

2.3. Paso 3: Asegurar el Compromiso Estatal

2.3.1. Establecer un Pacto de Cero Crecimiento

Un Pacto de Cero Crecimiento es un acuerdo entre los residentes de un área y el estado (Wigle, 2014). La comunidad se compromete a no construir ni expandirse a cambio del derecho a habitar sin interferencias por parte del estado. Este es un paso crucial para que el barrio y el estado lleguen a un consenso para prevenir más degradación ambiental y expansión urbana en los Cerros Orientales, al mismo tiempo que salvaguardan el derecho de la comunidad a la ciudad y a vivir en los cerros. Basado en los datos del censo, el barrio asegurará que no habrá aumento en nuevos hogares ni nuevos asentamientos construidos en los cerros. El estado garantizará que no se implementen planes ni acciones de desalojo si los hogares acuerdan quedarse.

Para asegurar la efectividad del pacto, el proceso de negociación debe ser transparente, con acuerdos claramente documentados y respaldados a nivel distrital. La participación de las comunidades locales es clave para la formulación de políticas y la gestión del crecimiento urbano descontrolado (Silva y Ma, 2021).

2.3.2. Aprobar el empleo de Parcelas Vacantes para Uso Comunal

Basándose en el Pacto de Cero Crecimiento, el estado aprobará el empleo de parcelas vacantes y casas abandonadas en espacios comunales. Esta demanda fue ampliamente respaldada por el barrio en nuestro taller. Para asegurar la credibilidad del Pacto de Cero Crecimiento y proteger y revitalizar las “funciones sociales y ecológicas del territorio”, el gobierno debería apoyar activamente el uso de estas áreas como huertos comunitarios y áreas recreativas, promoviendo espacios verdes de uso colectivo y la participación comunitaria.

2.3.3. Establecer un Canal de Comunicación Formal entre el Barrio y el Estado

Debería establecerse un canal de comunicación formal para asegurar un diálogo continuo entre la Mesa de Cerros, las autoridades estatales y los representantes del barrio. Este canal establecerá fechas específicas para facilitar reuniones regulares, sesiones de retroalimentación y procesos colaborativos

de toma de decisiones, mejorando la capacidad de influencia para activar cambios concretos respaldados por el estado. Un enlace o comité dedicado gestionará esta comunicación, asegurando transparencia y responsabilidad en todas las interacciones (dirigido por residentes diversos y representativos).

2.4. Paso 4: Redirigiendo Inversiones

2.4.1. Establecer un Cronograma de Gestión Forestal

Se debería desarrollar un cronograma integral de gestión forestal con aportes de expertos ambientales, académicos, miembros de la comunidad y funcionarios estatales. La participación comunitaria es crucial para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza arraigadas en el conocimiento local (Reid et al., 2024). “Somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha sabiduría, y podemos demostrarlo construyendo nuestro propio desarrollo”, dijo uno de los líderes comunitarios.

Este cronograma detallará actividades específicas, plazos y responsabilidades para el mantenimiento y la restauración de áreas forestales. El cronograma debería integrarse con la política actual de mitigación de incendios forestales, sustituyendo la simple eliminación de especies invasoras por la plantación de especies locales, soluciones basadas en la naturaleza e incluso la plantación de especies económicas.

2.4.2. Mejorar la Infraestructura Básica con la Participación Comunitaria

La inversión será redirigida para mejorar la infraestructura esencial dentro del barrio basada en los resultados del censo, como las vías, el suministro de agua, los sistemas de alcantarillado y la consolidación de laderas. Estos proyectos se llevarán a cabo con la participación activa de la comunidad, asegurando que las mejoras satisfagan las necesidades reales de los residentes y empleen conocimientos y métodos locales. Miembros de la comunidad de todos los ámbitos participarán en los procesos de planificación, implementación y monitoreo, fomentando un sentido de propiedad y responsabilidad. Mejorar la gobernanza, la toma de decisiones, la adopción de políticas y los esfuerzos de planificación (Tovar Tique et al., 2021). Idealmente, serán remunerados por este trabajo por parte del estado para evitar las trampas clásicas de la participación comunitaria (Lliso et al., 2020). A largo plazo, para promover la sostenibilidad y mejores condiciones de vida, los asentamientos se actualizarán con tecnologías y equipos ecológicos con subsidios y apoyo técnico del estado.

3. Conclusión

En resumen, este documento de recomendaciones de política pública describe las tendencias sociales y ambientales que han afectado a los residentes de tres comunidades en los Cerros Orientales. Problemas de inversión, legalidad y falta de información compartida y toma de decisiones han resultado en un ciclo de retroalimentación que conduce a mayores designaciones de riesgo. Esto es evidente en TA, donde la falta de inversión ha llevado a que el barrio sea designado como de alto riesgo. Las estrategias delineadas como parte del Pacto por la Vida adaptado serán pasos esenciales para ayudar a romper este ciclo de retroalimentación, promoviendo el derecho a la ciudad, la justicia ambiental y obteniendo un mayor reconocimiento gubernamental para los residentes. Al fomentar la cohesión comunitaria, mejorar la comunicación y construir alianzas, las recomendaciones están diseñadas para empoderar a los residentes para participar activamente en el desarrollo sostenible de manera inclusiva. La recolección de datos impulsada por la comunidad proporcionará ideas cruciales para la asignación de recursos y la conservación ambiental. Implementar estas estrategias no solo fortalece el Ecobarrio de San Cristóbal, sino que también ofrece un modelo para que otros Ecobarrios sigan, asegurando que más comunidades puedan afirmar sus derechos y lograr el reconocimiento gubernamental.

Agradecimientos

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a las comunidades de Triángulo Alto, Triángulo Bajo y Manantial, especialmente a Héctor, sin cuya ayuda habría sido imposible llevar a cabo nuestros proyectos. También deseamos agradecer a nuestros pasantes, Luisa Agudelo y Verónica Molano, y a Tatiana Ome y Andrés Sepúlveda por su orientación durante el trabajo de campo. Un agradecimiento especial a Adriana Allen por su continua e inestimable ayuda a lo largo del proyecto.

Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá; Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2000. Plan de Ordenamiento Territorial. Bogotá, D.C.
- Alcaldía Mayor de Bogotá; Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2022. Plan de Ordenamiento Territorial. Bogotá, D.C.
- Allen, A., Lambert, R., Frediani, A. A., & Ome, T. (2015). Can participatory mapping activate spatial and political practices? Mapping popular resistance and dwelling practices in Bogotá eastern hills. *Area*, 47(3), 261–271. <http://www.jstor.org/stable/24811674>
- Angelini, A. (2012). *Favela: Four Decades of Living on the Edge in Rio de Janeiro* By Janice Perlman Oxford University Press. 2010. 448 pages. *Social Forces*, 93(3), pp. e72–e72. doi: <https://doi.org/10.1093/sf/sos164>.
- Ansarri, M. 2022. Cartographies of poverty: Rethinking statistics, aesthetics and the law. *Environment and Planning D: Society and Space*, 40(3), pp.567–585.
- Carver, C., & Scheier, M. (1982). Control theory: A useful conceptual framework for personality-social, clinical, and health psychology. *Psychological Bulletin*, 92, 111–135.
- Dammert, L. (2012). Villa El Salvador: Un ejemplo de desarrollo comunitario en Lima. *Revista Peruana de Investigación Educativa*, 4(1), 123–140.
- Few, R. et al. 2021. Why representation matters in disaster recovery. GCRF Policy Briefings. The British Academy, London, UK.
- Fraser, A., 2017. The missing politics of urban vulnerability: The state and the co-production of climate risk. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49(12), pp.2835–2852.
- Law 1523 de 2012: Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Available at: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#:~:text=Es%20deber%20de%20las%20autoridades,voluntariado%20y%20de%20utilidad%20com%20C3%BA>.
- Li, T.M., 2007. *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. duke university Press
- Lliso, B. et al. 2020. Payments for ecosystem services or collective stewardship of Mother Earth? Applying deliberative valuation in an indigenous community in Colombia. *Ecological Economics*, 169.
- Maassen, J. (2017). *Emergy of an Urban Food Production System: A Case Study of Urban Agriculture in Detroit, Michigan*. [online] Available at: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1149251/FULLTEXT02.pdf>.
- Maya-Jariego, I. et al. 2019. Personal networks, social media, and community cohesion in the strategies of peace-building agents in Colombia to counteract the segregation of displaced populations. *Journal of Community Psychology*, 47(6), pp.1300–1312.
- Mesa Ambiental de los Cerros Orientales. 2006. *CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, TERRITORIO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO AMBIENTAL*. Working Paper. Available at: https://mesacerros.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/10/documento_para_el_alcaldez.pdf
- Ome Baron, A.T., 2017. *An ethnography of Bogotá's ecobarrios: the construction of place-based eco-political subjects, subjectivities and identities* (Doctoral dissertation, UCL (University College London)). https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tatiana+ome+ecobarrios+bogota&btnG=
- Reid, J., Challies, E., Te Maire Tau and Awatere, S. (2024). Adapting to climate change through nature-based solutions and indigenous knowledge: the case for landscape-scale ecosystem regeneration in the Rokohouia Delta. *Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, pp.1–19. doi: <https://doi.org/10.1080/1177083x.2023.2299364>.
- Sarmiento, H., 2022. Financing climate-related resettlements in uneven geographies of risk: Lessons from Bogota Humana. *Journal of Urban Affairs*, 44(7), pp.983–998.
- Silva, C. and Ma, J. (2021). A Sustainable Urban Sprawl? *disP - The Planning Review*, 57(3), pp.50–67. doi: <https://doi.org/10.1080/02513625.2021.2026667>.
- Tovar Tique, Y.P., Escobedo, F.J. and Clerici, N. (2021). Community-Based Importance and Quantification of Ecosystem Services, Disservices, Drivers, and Neotropical Dry Forests in a Rural Colombian Municipality. *Forests*, 12(7), p.919. doi: <https://doi.org/10.3390/f12070919>.
- Vieda Martínez, S.A., 2021. *Housing Informality beyond The Urban Poor: Spatialities, Public Institutions, and Social Injustice in Rich Settlements of Bogotá*. PhD Thesis.
- Wigle, J., 2014. The 'Graying' of 'Green' Zones: Spatial Governance and Irregular Settlement in Xochimilco, Mexico City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(2), pp.573–589.